

¡Nos están matando! La grave situación de derechos humanos en el Norte y Bajo Cauca.

Marzo 15 de 2018

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de las y los Defensores/as de Derechos Humanos, Líderes y Lideresas Sociales del Departamento nuevamente hacemos un llamado de urgencia al Gobierno nacional y regional, ante la grave situación de derechos humanos que atraviesan las subregiones del Norte y Bajo Cauca.

Durante 2018 se viene presentando desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas en estos dos territorios; en el Bajo Cauca, específicamente en **Cáceres** han tenido que dejar sus viviendas, alrededor de 1.500 personas. Por su parte en Tarazá este fenómeno se está presentando de manera silenciosa. Los desplazamientos se han dado a causa de las amenazas y de los enfrentamientos constantes entre las estructuras paramilitares de Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC y Los Caparrapos. En **Ituango** se registra más de 215 personas desplazadas durante 2017 y lo que va corrido de 2018, y existe una alerta de riesgo por el posible desplazamiento de 338 indígenas, este desarraigo, se debe a las disputas entre las disidencias de las FARC y las AGC. Es constante en Ituango encontrar el desplazamiento gota a gota, de diferentes veredas están siendo expulsadas familias, que por miedo no hacen las denuncias, presentándose un subregistro.

A esto se suma los **confinamientos de la población y un control territorial** que impide la libre movilidad de los habitantes, en especial en horas de la noche, ejemplo de esto, es la prohibición que impusieron los paramilitares en los territorios:

- Ituango: Corregimiento del Aro, Corregimiento de Santa Rita y Corregimiento la Granja.
- Tarazá: En los 5 corregimientos, con especial situación del Corregimiento de la Caucana, El Cinco, El Doce y Puerto Antioquia (Control de Fronteras)
- Valdivia: Puerto Valdivia

En los municipios de **Tarazá y Valdivia** se registran de manera **constante combates** entre AGC y Caparrapos, específicamente en el Cañón de Iglesias, La Caucana, El Doce, El Catorce y El Quince, estas estructuras paramilitares realizan patrullaje abierto y de acuerdo a las denuncias, se les puede ver uniformados y portando armas cortas y largas. Esto sucede pese a que existe presencia de la fuerza pública en la zona (Ejército y Policía).

Es de reiterar que las **extorsiones realizadas** por los grupos paramilitares se ha incrementado en las zonas de influencia de las AGC, es así como hoy se está obligando a los campesinos a pagar por hectárea de tierra y litro de leche, lo mismo sucede con los locales comerciales. También contratistas de obras estarían pagando a los paramilitares, quienes en ocasiones, han atentado contra trabajadores de empresas que se niegan a pagar la extorsión.

En este marco de graves violaciones a los derechos humanos, la labor de las y los defensores, también se encuentra en riesgo, muestra de ello es que en la zona del Norte y Bajo Cauca, durante 2017, se han presentado 4 homicidios contra líderes sociales. En lo que va corrido de 2018, estas dos subregiones registraron 11 ataques contra defensores y defensoras, entre ellas 2 homicidios, los cuales ocurrieron en Cáceres y Caucaasia.

Las amenazas contra líderes pertenecientes a procesos organizativos (8 casos) muestran el alto nivel de vulnerabilidad que enfrentan las personas que se han organizado para exigir sus derechos y la defensa del territorio. A esto se suma que en Tarazá, Valdivia, Anori e Ituango, las AGC, han llamado a los líderes sociales y comunales para exigirles copias de actas de sus reuniones, realizar censos poblacionales y los obligan asistir a reuniones con sus mandos para dar a conocer “las nuevas reglas” que deben ser acatadas por todos los y las habitantes. Se han presentado seguimientos a líderes por parte de paramilitares en los municipios de Yarumal, Valdivia y Briceño.

Pese a que habíamos advertido, el riesgo inminente de estos territorios por la alta presencia paramilitar, por la continuidad de nexos entre estas estructuras y miembros de la fuerza pública y autoridades civiles, por los incumplimientos de los Acuerdos de Paz y por la negativa del gobierno de reconocer la sistematicidad de las agresiones contra las y los defensores, el Estado no ha mostrado una voluntad real para enfrentar todas las causas que generan estas graves violaciones a los derechos humanos.

Recalamos que en los recientes informes emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo – Antioquia, los cuales son de conocimiento del gobierno nacional, también se da cuenta de estas graves violaciones a los derechos humanos y se ubican veredas que se encuentran en inminente riesgo; además recomiendan una serie de medidas de protección a las autoridades locales, departamentales y nacionales, para que se proteja a los habitantes de los territorios.

Desde el Nodo Antioquia y el Proceso Social de Garantías, expresamos nuestra preocupación por la zona de Urabá, la cual se encuentra en grave riesgo por la fuerte presencia paramilitar quien realiza control sobre las poblaciones e intimida y persigue los procesos organizativos. Las AGC han señalado en varias ocasiones que “no queremos saber nada de defensores y si nos toca, los vamos a matar”.

Como organizaciones de derechos humanos exigimos: 1) Que se brinden todas las garantías para proteger a las poblaciones. 2) Que se cumplan e implementen los Acuerdos de Paz, entre ellos el desmantelamiento de las estructuras paramilitares. 3) Que se proteja a las y los defensores de derechos humanos. 4) Que se investigue y sancione a los agentes del Estado que podrían tener nexos con los paramilitares, así como por conductas que por acción u omisión conlleven a graves violaciones a los derechos humanos.

¡Que la paz no nos cueste la vida!